

Castilla y León

La Plataforma por la Escuela Pública anuncia movilizaciones en el sector

EL COMPROMISO de Juan Vicente Herrera en su investidura, de blindar los servicios públicos esenciales, entre ellos el educativo, para que no se produjese “ningún paso atrás”, sino avances en la calidad de los mismos, nunca se ha correspondido con los hechos. Estos últimos años se ha reducido drásticamente la construcción de nuevos centros y las partidas para el mantenimiento de los ya existentes, se ha producido una importante mengua de los gastos corrientes para el funcionamiento de colegios e institutos y se han dejado sin cubrir numerosas bajas de docentes, cuya profesionalidad permite atender la enorme diversidad del alumnado de la escuela pública. Sin ánimo de ser exhaustivos, las actividades extraescolares, los comedores y el transporte del alumnado también están bajo mínimos. Otro tanto ocurre con la financiación de las universidades y con las becas, al tiempo que suben las tasas de matrícula.

Además se ha producido un trato preferencial hacia la escuela privada, concertada y confesional, ya que mientras la red pública asume la escolarización de todos los sectores sociales, a la privada-concertada se le está permitiendo, con el apoyo de la Administración y con la coartada de una mal entendida libertad de elección de centro, que seleccionen al alumnado.

Ahora el paquete de seis medidas anunciadas por el ministro, en el que se incluyen, entre otras, la de aumentar de forma desproporcionada tanto la jornada lectiva (y despedir profesorado interino) como el número de alumnos por clase (para reducir unidades), no hacen sino llevar hasta sus últimas consecuencias la lógica del deterioro de la escuela pública.

De hecho la crisis está sirviendo de coartada para imponer un modelo social en el que la excelencia, pensada para una minoría, se contrapone con una inmensa mayoría a la que esperan trabajos precarios y mal pagados.

Aunque, tal vez, la peor consecuencia de esta estafa de la que somos víctimas, sea la resignación: porque los recortes no nos van a sacar de la crisis. Hay alternativas a la dictadura de los mercados, por ejemplo, una presión fiscal potente y progresiva que, además, combata el fraude, o, también, políticas de estímulo económico que generen empleo.

A pesar de la presión para que las comunidades autónomas repercutan la reducción del déficit sobre las partidas sociales, los Presupuestos de Castilla y León representan la ocasión para el presidente Herrera de demostrar el valor que da a su compromiso: negociando con la comunidad educativa para dar prioridad a la financiación de la escuela pública (desde Infantil a la Universidad), y mantener los puestos de trabajo del profesorado así como los programas educativos y medidas de atención a la diversidad, además de los servicios que compensan las desigualdades: becas, comedores, madrugadores, tardes en el colegio o centros abiertos.

Si, por el contrario, la agresión a la educación pública se materializa, la Plataforma por la Escuela Pública Laica y Gratuita de Castilla y León llamará a la comunidad educativa y a la sociedad para que respondan con contundencia, en colegios, institutos y universidades, y también en la calle, a unos

presupuestos antisociales y en defensa de una educación pública para todos y todas, de calidad, laica, gratuita, democrática, igualitaria, integradora y participativa.

Esta plataforma está formada por las organizaciones regionales siguientes: Federación de Enseñanza de CCOO, CGT-Enseñanza, FETE-UGT CyL, Federación STECyL-i, Confederación de AMPAs de CyL (CONFAPACAL), Confederación de Asociaciones de vecinos de CyL(CAVECAL), ACEL (Escuela Laica) e Izquierda Unida CyL.